

INE/CG29/2023

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-81/2022

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, relativos a la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno, identificados con las claves **INE/CG729/2022** e **INE/CG730/2022**, respectivamente.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el cinco de diciembre de dos mil veintidós, el Partido Acción Nacional interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con las claves **INE/CG729/2022** e **INE/CG730/2022** respectivamente, correspondiente al estado de Yucatán, quedando radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el expediente identificado como **SUP-RAP-361/2022**.

III. Remisión. El trece de diciembre de dos mil veintidós, la Sala Superior determinó remitir el expediente **SUP-RAP-361/2022**, a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Regional Xalapa), al considerar que era competente por razón territorial, toda vez que el recurrente impugnó conclusiones relativas al estado de Yucatán.

IV. Recepción y turno. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, mediante acuerdo la Sala Regional Xalapa, recibió y acordó integrar el expediente **SX-RAP-81/2022**, derivado de la remisión referida en el antecede inmediato anterior.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

V. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa, en sesión pública celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, resolvió el recurso referido, determinando en el punto resolutivo **ÚNICO** lo que se transcribe a continuación:

“(…)

***ÚNICO.** Se **revoca**, en lo que fue materia de impugnación, la resolución y dictamen controvertidos, para los efectos precisados en el considerando **cuarto** de esta sentencia.*

(…)”

VI. Cumplimiento. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación **SX-RAP-81/2022** tuvo por efecto revocar el Dictamen y la Resolución correspondiente en lo que fue materia de impugnación, sin embargo, del análisis se advierte que los efectos son únicamente respecto de la Resolución **INE/CG730/2022**, por lo que, para los efectos ordenados por la Sala Regional Xalapa, se modifica dicho documento. Lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional, correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno en el estado de Yucatán.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, la Sala Regional Xalapa resolvió revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG729/2022** y la Resolución **INE/CG730/2022**, emitidos por el Consejo General

de este Instituto, respecto de la conclusión **1.32-C23-PAN-YC**, y mandata a esta autoridad que emita una nueva resolución en la que de manera fundada y motivada **reconsidere el monto de la sanción** respecto de la resolución precisada el cual debe incluir, por lo menos, el valor del beneficio obtenido.

A fin de dar cumplimiento, se modifica la Resolución observando a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria SX-RAP-81/2022.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del **estudio de fondo** de la sentencia recaída en el expediente **SX-RAP-81/2022**, la Sala Regional Xalapa determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

TERCERO. Estudio de fondo

17. La pretensión última del recurrente consiste en que esta Sala Regional revoque la sanción establecida en la conclusión 1.32-C23-PAN-YC consistente en “El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral, consistente en aportaciones en efectivo, por un monto de \$450,000.00”, o bien dicha sanción sea reconsiderada.

18. Para sostener esa pretensión manifiesta lo siguiente:

19. Respecto a la sanción establecida en la conclusión 1.32-C23-PAN-YC correspondiente al Comité Directivo Estatal (en adelante CDE) del PAN en Yucatán, la autoridad responsable incurre en una falta de fundamentación y motivación en su calificación, ya que adolece de exhaustividad en la aplicación de la sanción.

20. Refiere que el Reglamento de Fiscalización no prevé alguna regulación que le permita a los sujetos obligados identificar las medidas o mecanismos idóneos respecto a la posible verificación del cumplimiento estricto de la norma.

21. Esto es, manifiesta que cumplió con todas las disposiciones normativas establecidas para la recepción de aportaciones, tales como el artículo 96, numeral 3, inciso VIII, del Reglamento de Fiscalización.

22. Así, argumenta que se garantizó el adecuado manejo de los recursos públicos destinados para el desarrollo de sus operaciones ordinarias, pues las aportaciones fueron recibidas mediante transferencias electrónicas, como lo señala la norma; además, esas aportaciones fueron registradas y comprobadas en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con la documentación

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

soporte y –respecto a la aportación de Jesús Alberto Herrera Carrillo por la cantidad de trescientos mil pesos, moneda nacional (\$300,000.00)– se le avisó oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la cantidad rebasó las 3210 Unidades de Medida y Actualización (en adelante UMA).

23. *Aduce que la Sala Superior de este Tribunal Electoral al resolver el expediente SUP-RAP-397/2021 Y ACUMULADOS determinó que la autoridad electoral debe delimitar obligaciones concretas que permitan a los sujetos obligados identificar y, en su caso, rechazar aportaciones de simpatizantes y militantes que pudieran considerarse ilícitas, como las que provienen de ente prohibido. Ello, porque no existe normativa que regule el procedimiento a seguir para que los partidos políticos puedan cerciorarse de que las aportaciones de las y los simpatizantes o militantes no provengan de entes prohibidos.*

24. *Además, precisa que la autoridad administrativa solicitó la aclaración de las transferencias a las y los aportantes, pero nunca a él en su carácter de sujeto obligado, lo que lo dejó en estado de indefensión, pues no pudo realizar las aclaraciones respectivas.*

25. *Manifiesta que carece de atribuciones suficientes para indagar sobre la licitud del origen de las aportaciones de sus simpatizantes y militantes, por lo que sólo cumplió con las disposiciones reglamentarias.*

26. *Argumenta que dado que los partidos políticos no cuentan con lineamientos ciertos, homogéneos, objetivos y razonables que les permitan conocer los mecanismos de control idóneos y pertinentes para verificar la licitud de los recursos que reciben, la sanción impuesta debe ser desestimada, o bien reconsiderada.*

27. *Lo anterior, porque la autoridad responsable sólo presume que cuenta con la capacidad económica para solventarla, cuando se pone en riesgo el cumplimiento de los fines esenciales del partido político, o bien existe la necesidad de que, como partido, mantenga un nivel financiero óptimo para desarrollar sus actividades de acuerdo con los fines constitucionales y legales.*

28. *Por último, señala que la sanción impuesta es desproporcionada porque no existe reincidencia, tal como lo reconoce la autoridad responsable en el dictamen consolidado.*

29. *Por cuestión de método los argumentos expuestos se analizarán de manera conjunta, sin que ello le cause perjuicio al partido promovente, pues lo importante no es el orden de estudio, sino el análisis total de sus planteamientos; lo que tiene sustento en la jurisprudencia identificada con la*

clave 04/2000, de rubro “**AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**”.¹²

Marco normativo

Fundamentación y motivación

30. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene el deber de fundar y motivar su actuar en leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate; obligación constitucional que incluye a cada uno de los órganos integrantes del INE en términos del artículo 41 de la citada ley fundamental.

31. En el entendido anterior, todas las autoridades centrales o desconcentradas del INE tienen la obligación de especificar en sus actos o resoluciones las disposiciones jurídicas que les confieren competencia y aquéllas que sustentan sus determinaciones; debiendo, además, expresar las consideraciones lógicas que demuestren la aplicabilidad de las referidas hipótesis normativas a cada caso concreto.

32. En ese sentido, se entenderán infringidas por parte de las autoridades electorales tales obligaciones cuando: (i) omitan invocar las normas facultativas de su actuar o las que sustenten su decisión, (ii) omitan exponer las circunstancias, razones o causas tomadas en consideración para la aplicación de esas normas, o bien, (iii) cuando no exista adecuación entre los motivos invocados y las normas aplicables al caso.

33. De lo anterior, es factible concluir que las omisiones ya referidas (falta de fundamentación o motivación) constituyen una violación formal a las disposiciones constitucionales indicadas, mientras que la falta de adecuación en las hipótesis normativas al caso concreto constituye una violación material de aquéllas, esto es, una indebida fundamentación y motivación.¹³

34. En esta línea argumentativa, resulta evidente que el Consejo General del INE, al ser la autoridad administrativa electoral con atribuciones para fiscalizar los recursos de los partidos políticos y la encargada de emitir la resolución impugnada, debe cumplir todos esos requisitos.

Exhaustividad.

35. La exhaustividad de las resoluciones y sentencias constituye el deber de agotar cuidadosamente todos y cada uno de los planteamientos expuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones, en correlación con la valoración de las pruebas respectivas.¹⁴

Determinación de esta Sala Regional

36. Los planteamientos expuestos por el recurrente son **parcialmente fundados**.

37. En primer lugar, conviene precisar que la conclusión impugnada por el promovente consiste en que éste omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral por un monto de cuatrocientos cincuenta mil pesos, moneda nacional (\$450,000.00).

38. Ello, porque –tal como se señaló en el dictamen consolidado– de la aportación de Claudia Gabriela Mendoza Gálvez se identificó en su cuenta bancaria que los días diez y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno recibió transferencias respectivamente de cien mil pesos, moneda nacional (\$100,000.00) y cincuenta mil pesos, moneda nacional (\$50,000.00) por parte de la persona moral Terracerías Comsterra S.A. de C.V.; asimismo, se constató que los mismos días la ciudadana referida realizó aportaciones al partido recurrente por iguales cantidades.

39. No obstante, dicha ciudadana fue omisa en presentar aclaraciones sobre su relación con la persona moral antes citada.

40. En cuanto a la aportación de Jesús Alberto Herrera Carrillo, la autoridad responsable identificó en su cuenta bancaria que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno recibió la cantidad de trescientos mil pesos, moneda nacional (\$300,000.00) por parte de la empresa Tecnologías Sistemas y Redes Narvarte, S.A.; asimismo, se constató que el mismo día el ciudadano referido realizó aportación al partido actor por igual cantidad.

41. Además, si bien dicho ciudadano señaló que el dinero que aportó tiene origen lícito por ser producto de su trabajo, lo cierto es que fue omiso en realizar las aclaraciones solicitadas.

42. En ese orden, la autoridad responsable determinó que como las personas Claudia Gabriela Mendoza Gálvez y Jesús Alberto Herrera Carrillo omitieron aclarar, respectivamente, su vínculo con las empresas Terracerías Comsterra S.A. de C.V. y Tecnologías Sistemas y Redes Narvarte S.A., entonces no se identificó el origen de las aportaciones realizadas al instituto político.

43. Aunado que, si bien se hicieron del conocimiento del ente político mediante el oficio de errores y omisiones respectivo, lo cierto es que el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

44. *En ese sentido, el Instituto determinó imponer una sanción del 200% del monto involucrado, pues concluyó que el recurrente transgredió lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos; es decir, omitió rechazar aportaciones en efectivo por personas impedidas.*

45. *Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Ley General de Partidos Políticos; y 22, incisos a y b; y 237, párrafo 1, inciso a, del Reglamento de Fiscalización, es obligación de los partidos políticos presentar sus informes, considerando la totalidad de los ingresos y gastos realizados, reflejados en los registros contables incorporados en el SIF. Además, deben adjuntar el soporte documental de la totalidad de operaciones, así como las balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos en el propio Reglamento.*

46. *Esto es, en efecto, es obligación del actor presentar toda la documentación que soporte los informes de sus ingresos e incorporarlos en el SIF.*

47. *No obstante, tal como lo precisó el actor, la Sala Superior de este Tribunal al resolver el expediente SUP-RAP-397/2021 Y ACUMULADOS precisó que el INE, con base en su facultad reglamentaria y conforme al marco constitucional y legal, debe proporcionar a los partidos políticos las obligaciones específicas mínimas respecto del control que deben realizar al momento de recibir aportaciones de militantes o simpatizantes.*

48. *Es decir, la autoridad electoral debe delimitar obligaciones concretas que permitan a los sujetos obligados identificar y en su caso rechazar aportaciones de simpatizantes y militantes que, si bien en principio pudieran considerarse lícitas, en realidad provengan de alguna fuente de financiamiento prohibido, ya que actualmente no hay lineamientos claros, ciertos y homogéneos respecto de qué mecanismos son idóneos y pueden implementarse por los partidos políticos para identificar el origen real de los recursos privados que reciben.*

49. *En efecto, dicha superioridad precisó que los partidos políticos son, en primer lugar, los sujetos obligados en presentar los informes de ingresos y gastos derivado de su calidad de entidades de interés público y de la infraestructura que tienen, pues cuentan con un representante de finanzas a quien se le brinda acceso al sistema integral de fiscalización y que tiene obligaciones específicas y primarias.*

50. *Refirió que este tipo de deberes obedecen a una lógica de prevención de la que participan los partidos políticos como sujetos obligados, lo que a su vez se confirma con el deber de vigilancia reforzada que se desprende de la normativa aplicable y de la línea jurisprudencial de este Tribunal.*

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

51. No obstante, estableció que, si bien la legislación electoral impone a los partidos políticos un deber de vigilancia reforzada respecto de los recursos que reciben, en el sentido que no provengan de entes prohibidos; lo cierto es que no existe normativa que regule el procedimiento que deben seguir para cerciorarse de que las aportaciones de simpatizantes o militantes no provengan o tengan su origen en algún ente prohibido o de fuente ilícita.

*52. Lo antepuesto, porque el Reglamento de Fiscalización es omiso en prevenir o remitir alguna regulación que les permita a los sujetos obligados con total certidumbre identificar qué medidas o mecanismos son idóneos, bajo el contexto de sus **facultades limitadas** respecto de la posible verificación al cumplimiento estricto de la norma.*

*53. Así, la Sala Superior de este Tribunal consideró necesario que el INE en coordinación con las autoridades que estime pertinentes, implemente **lineamientos ciertos, homogéneos, basados en elementos objetivos y razonables**, que les permitan a los partidos políticos conocer qué mecanismos de control son idóneos y pertinentes para verificar la licitud de los recursos que reciben.*

54. En ese sentido, como se indicó, si bien este órgano jurisdiccional federal ha establecido que es obligación de los partidos políticos adjuntar la totalidad de documentación que soporte sus operaciones, como lo señala el Reglamento de Fiscalización; lo cierto es que le asiste la razón al recurrente al señalar que como partido político no tiene la facultad de verificar el origen y licitud de las aportaciones recibidas por sus simpatizantes o militantes, pues –tal como lo reconoció la Sala Superior de este Tribunal Electoral– en el Reglamento de Fiscalización no se prevé dicha facultad, tan es así que esa superioridad le ordenó al INE que implementara los lineamientos y mecanismos correspondientes para que los partidos políticos puedan realizar esa verificación.

55. Así, al recibir las aportaciones de Claudia Gabriela Mendoza Gálvez y Jesús Alberto Herrera Carrillo el partido actor sólo podía realizar lo que el Reglamento de Fiscalización le faculta, pero no verificar el origen de esas aportaciones porque dicha potestad le corresponde al Instituto.

56. Aunado a lo anterior, el INE en el oficio de segunda vuelta se limitó a señalar lo siguiente:

(...)

En cuanto a la aportante, Claudia Gabriela Mendoza Gálvez, dio respuesta al oficio número INE/UTF/DA/16911/2022, por medio del cual, se le solicitó hacer

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022**

las aclaraciones pertinentes que compruebe su relación con la empresa Terracerías Comsterra S.A. de C.V. de quien recibió recursos previo a sus aportaciones, con escrito de fecha 07 de septiembre de 2022, remitido por correo electrónico a la UTF el día 08/09/2022, en el cual señaló que realizó aportaciones al instituto político en el estado de Yucatán, sin embargo omitió, presentar aclaraciones sobre su relación con la persona moral señalada.

En cuanto al aportante, Jesús Alberto Herrera Carrillo, dio respuesta al oficio número INE/UTF/DA/16913/2022, por medio del cual, se le solicitó hacer las aclaraciones pertinentes que compruebe su relación con la empresa Tecnologías Sistemas y Redes Narvarte S.A. de quien recibió recursos previo a sus aportaciones, con escrito sin número y sin fecha, remitido por correo electrónico a la UTF el día 12/09/2022, en el cual señaló que el dinero del que dispuso aportar tiene origen lícito, como producto de su trabajo recibido de sus sueldos como trabajador; sin embargo, omitió aclarar su relación con la persona moral señalada.

(...)

57. *De lo anterior se advierte que en el oficio referido la autoridad responsable se limitó a señalar que respecto a Claudia Gabriela Mendoza Gálvez y Jesús Alberto Herrera Carrillo se les solicitó las aclaraciones pertinentes porque recibieron recursos de empresas previo a sus aportaciones.*

58. *Por tanto, contrario a lo señalado por la autoridad responsable, el partido actor no contó con la información suficiente para deslindarse.*

59. *Además, aun cuando el Instituto hubiera aportado mayores elementos para que el partido político diera una respuesta más exhaustiva o bien deslindarse, lo cierto es que –como se precisó– éste no cuenta con las facultades necesarias para realizar la verificación correspondiente.*

60. *En ese orden, también le asiste la razón al actor respecto a que la sanción impuesta debe ser reconsiderada por ser desproporcionada.*

61. *Esto es, el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, establece que como una obligación de los partidos políticos es rechazar toda clase de apoyo económico proveniente de cualquiera de las personas a las que la norma prohíbe financiarles, como a las personas morales (por sí o por interpósita persona).*

62. *En el caso, las aportaciones que dieron origen a la sanción controvertida provinieron de dos personas (Claudia Gabriela Mendoza Gálvez y Jesús Alberto Herrera Carrillo) que no se encuentran prohibidas en el catálogo señalado en el artículo 54, apartado 1, de la Ley General de Partidos Políticos.*

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

63. *No obstante, derivado de la investigación correspondiente efectuada por el Instituto de las cuentas bancarias de dichas personas, fue que se determinó que sus aportaciones realmente provenían de empresas y, por tanto, personas morales que se encuentran prohibidas por el citado artículo 54.*

64. *En ese orden, tal como se precisó en líneas anteriores, el partido actor no tenía la facultad de realizar la verificación anterior, por lo que no se le puede imputar la transgresión directa a la norma señalada.*

65. *Así, esta Sala Regional considera que la sanción a imponerse debe ser proporcional a la falta cometida.*

66. *Ahora, conviene aclarar que si bien es cierto que para la imposición de dicha sanción no se consideró que el partido político carecía de facultades para verificar si las aportaciones de las personas físicas en realidad provenían de entes prohibidos por la norma aplicable; también lo es que es un hecho no controvertido que la investigación correspondiente efectuada por la autoridad responsable concluyó en que los recursos realmente provenían de dos empresas.*

67. *Aunado a ello, al momento de realizar el procedimiento de revisión respectivo el Consejo General del INE no había emitido los lineamientos que fueron ordenados por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-397/2021 Y ACUMULADOS.*

68. *En ese orden de ideas, derivado de las situaciones expuestas se considera que el Instituto debe determinar nuevamente el monto de la multa impuesta, el cual debe incluir, por lo menos, el valor del beneficio obtenido; esto es, además de cumplir con su función sancionatoria típica, debe realizar una función equivalente al decomiso del beneficio económico.*

69. *Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 24/2014 de rubro “**MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN)**”,¹⁵ así como la tesis XII/2004 de rubro “**MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO**”.¹⁶*

70. *De ahí lo **parcialmente fundado** de los argumentos expuestos por el partido promovente.*

CUARTO. Efectos de la sentencia

71. Ante lo fundado de los agravios y conforme al artículo 47 de la ley general de medios, procede dictar los efectos respectivos.

72. En primer lugar, procede **revocar** el dictamen y resolución controvertidos, únicamente en lo que fue materia de impugnación, y para efectos de que la autoridad responsable emita una nueva resolución en la que de manera fundada y motivada reconsidere el monto de la sanción correspondiente a la conducta que originó la conclusión 1.32-C23-PAN-YC, la cual debe ser proporcional y conforme a los parámetros expuestos en la presente ejecutoria.

(...)"

(...)

12. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6, así como en la página electrónica <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/>

13. Al respecto resulta aplicable, por analogía, la tesis XXI. 1o. 90 K, de rubro: "**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL**". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Tomo XIV, septiembre de 1994, página. 334; de Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 210508. Así como en la página <https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis>

14. Véase la jurisprudencia 43/2002 de rubro: "**PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN**". Consultable en <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/>

15. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 48 y 49. Así como en la página electrónica <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/>

16. Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 705 y 706. Así como en la página electrónica <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/>

En consecuencia, se advierte que la Sala Regional Xalapa dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como **INE/CG730/2022**, por lo que este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, respecto de la conclusión **1.32-C23-PAN-YC**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado en la sentencia materia de cumplimiento del presente Acuerdo.

4. Cumplimiento. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a cumplir con lo ordenado en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SX-RAP-81/2022**.

5. Capacidad económica. Se precisa que para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

Bajo esta tesitura, debe considerarse que el **Partido Acción Nacional** con acreditación local en el estado de Yucatán, cuenta con la capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que mediante el Acuerdo C.G.-032/2022, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2023, el monto siguiente:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2023
Partido Acción Nacional	\$32,110,405.84

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que, para valorar la capacidad económica del partido político infractor, es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática, dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, cabe señalar que el Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán no cuenta con saldos pendientes, al mes de enero de 2023, por pagar relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el sujeto obligado con financiamiento federal tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, esta autoridad electoral da cumplimiento a la sentencia referida, de conformidad con lo siguiente:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Se revoca en lo que fue materia de impugnación, la resolución y dictamen controvertidos.	Revocar el dictamen y resolución controvertidos, únicamente en lo que fue materia de impugnación, y para efectos de que la autoridad responsable emita una nueva resolución en la que de manera fundada y motivada reconsidere el monto de la sanción correspondiente a la conducta que originó la conclusión 1.32-C23-PAN-YC, la cual debe ser proporcional y conforme a los parámetros expuestos en la ejecutoria.	<p>En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, se reconsideró el monto de la sanción correspondiente a la conducta que originó la conclusión 1.32-C23-PAN-YC.</p> <p>Para ello se tomó en consideración lo referido por la Sala Xalapa respecto de que el sujeto obligado carecía de facultades para verificar si las aportaciones de las personas físicas en realidad provenían de entes prohibidos por la norma aplicable, así como que de la investigación realizada por esta autoridad se concluyó que los recursos provenían de dos empresas y, por tanto, personas morales que se encuentran prohibidas por el artículo 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.</p> <p>Así, se determinó nuevamente el monto de la sanción impuesta, el cual incluye el valor del beneficio obtenido; esto es, además de cumplir con su función sancionatoria típica, realiza una función equivalente al decomiso del beneficio económico, que asciende a \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.).</p> <p>Así, por todo lo expuesto, la sanción a imponer debe ser proporcional a tales circunstancias por lo que se considera que debe corresponder al valor del beneficio obtenido en otras palabras, al 100% (cien por ciento) de las aportaciones realizadas al partido político.</p>	En la Resolución.

Modificación a la Resolución INE/CG730/2022.

Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente **SX-RAP-81/2022** las demás consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG730/2022**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del considerando **18.2.31, inciso d) conclusión 1.32-C23-PAN-YC**, en los términos siguientes:

18.2.31 COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE YUCATÁN.

(...)

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto político son las siguientes:

(...)

d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.32-C23-PAN-YC.

(...)

d) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, a saber:

No.	Conclusión	Monto involucrado
1.32-C23-PAN-YC	El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral, consistente en aportaciones en efectivo, por un monto de \$450,000.00	\$450,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado¹, que forma parte de la motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación,

¹ En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que "... esta Sala Superior considera que los dictámenes consolidados sobre los ingresos y gastos [...], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen consolidado, [...], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución [...]."

se hicieron del conocimiento del ente político mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretó.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se impondrá la sanción considerando, además, que no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado “**Capacidad Económica**” del presente Acuerdo.

**CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022**

Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que se describe en el cuadro denominado **conducta infractora** localizado en el inciso siguiente, la falta corresponde a la **omisión**² de rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral, atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretó.

Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, incurrió en la siguiente:

Conducta infractora		
No.	Conclusión	Monto involucrado
1.32-C23-PAN-YC	El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral, consistente en aportaciones en efectivo, por un monto de \$450,000.00	\$450,000.00

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2021.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Yucatán.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta

² Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de la normatividad transgredida.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos durante el ejercicio anual materia de análisis.

En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado con lo que impide garantizar la certeza y la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.³

En este sentido, es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos

³ “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (...) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; (...)”

“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados, como instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de una persona prohibida por la legislación electoral.

En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie de una persona prohibida por la legislación electoral, responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica o los intereses que una persona impedida por la legislación electoral pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los institutos políticos.

Es importante señalar que, con la actualización de la falta de fondo, se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y transparencia en el origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

Lo anterior es así porque la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de alguna persona cuya prohibición está expresa en la normativa electoral.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Ahora bien, en el caso concreto, la aportación a favor del instituto político la llevaron a cabo dos personas físicas que se encuentran permitidas por la legislación. No obstante, derivado de la investigación y mecanismos de verificación llevados a cabo por la autoridad fiscalizadora, se obtuvieron elementos que permitieron concluir que el recurso de las aportaciones realmente provenía de personas morales; esto es, se advirtió una simulación respecto al origen de los recursos, ya que las personas físicas actuaron como interpósitos entre las empresas y el partido político beneficiado.

No obstante lo anterior, el sujeto obligado no cuenta con las facultades necesarias para realizar la verificación correspondiente respecto del origen de las aportaciones, es decir, el partido incoado estaba imposibilitado para conocer el verdadero origen del recurso que le fue aportado supuestamente por personas físicas, por tanto, le resultó materialmente imposible contar con la información suficiente para rechazar una aportación personas morales, que se encuentran prohibidas por el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

En este sentido, si bien el partido político incumplió con su obligación prevista, en el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, consistente en el **deber de rechazar**, entre otros apoyos, los de tipo propagandístico, económico o político, provenientes de entes cuya proscripción tiene fundamento en la legislación electoral, en el caso en concreto debe considerarse como atenuante en la imposición de la sanción la imposibilidad que tenía para conocer el verdadero origen de los recursos recibidos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la conducta señalada son la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados antes indicados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos del partido político, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se establece la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.⁴

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado “**Capacidad Económica**” del presente Acuerdo, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

⁴ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A. *CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
- Que el sujeto obligado se encontraba materialmente imposibilitado para conocer el verdadero origen de los recursos recibidos, esto es, que provenían de personas morales y no de personas físicas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵

⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** del artículo señalado consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **\$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...).

7. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido Acción Nacional, en la resolución INE/CG730/2022 quedan en los términos siguientes:

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; (...) IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, (...) con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

Resolución INE/CG730/2022	Acuerdo en cumplimiento a la sentencia SX-RAP-81/2022
<p>TRIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.31 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.32-C23-PAN-YC.</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>(...)</p>	<p>TRIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.31 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.32-C23-PAN-YC.</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>(...)</p>

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los considerandos **6 y 7** del presente Acuerdo, el Punto Resolutivo **TRIGÉSIMO SEGUNDO**, correspondiente al Considerando **18.2.31 Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán**, de la Resolución INE/CG730/2022, para quedar de la manera siguiente:

“R E S U E L V E

(...)

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **18.2.31** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán**, de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las sanciones siguientes:

(...)

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **1.32-C23-PAN-YC.**

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**.

(...)"

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; y 44, numeral 1, inciso jj); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución identificada con la clave **INE/CG730/2022** aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en los términos precisados en los Considerandos **6, 7 y 8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-81/2022**.

TERCERO. Notifíquese electrónicamente al Partido Acción Nacional, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para que proceda al cobro de las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional, las cuales se harán efectivas a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción económica, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-81/2022

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 25 de enero de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**